**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI**
**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

REF. ORDINARIO DE **ANA JULIA RÍOS ROMERO**
VS. **COLPENSIONES**
LITISCONSORTES: **HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS**
RADICACIÓN: **760013105 014 2017 00642 01**

Hoy **04 de marzo de 2022**, surtido el trámite previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI**, integrada por los magistrados **MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO**, quien la preside en calidad de ponente, **LUIS GABRIEL MORENO LOVERA** y **CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ**, en ambiente de escrituralidad virtual y distanciamiento social por mandato del D. 1614 del 30 de noviembre de 2021, resuelve el **recurso de apelación formulado por la demandada y el grado jurisdiccional de consulta en su favor,** respecto de la sentencia dictada por el JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI, dentro del proceso ordinario laboral que promovió **ANA JULIA RÍOS ROMERO** contra **COLPENSIONES**, de radicación No. **76001310501420170064201**, con base en la ponencia discutida y aprobada en Sala de Decisión llevada a cabo el **09 de diciembre de 2021**, celebrada, como consta en el **Acta No 88**, tal como lo regulan los artículos 54 a 56 de la ley 270 de 1996 y el artículo 11 del Acuerdo PCSJA21-11840 del 26-08-2021, en ambiente preferente virtual.

En consecuencia, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, procede a resolver **la apelación y la consulta** en esta que corresponde a la

## SENTENCIA NÚMERO 49

## SÍNTESIS DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN

Las pretensiones de la demandante en están causa está orientadas a obtener de la jurisdicción una declaración de condena contra la entidad convocada COLPENSIONES, por lo siguiente (fl. 2):

**PRIMERO:** Que se condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, representada por la señora ADRIANA MARIA GUZMAN o a quien haga sus veces, a reliquidar la pensión de sobreviviente de la señora ANA JULIA RIOS ROMERO, a partir del 25 de enero de 2007, mediante indexación de la primera mesada pensional.

**SEGUNDO:** Que se condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, representada por la señora ADRIANA MARIA GUZMAN o a quien haga sus veces a reconocer y pagar a la señora ANA JULIA RIOS ROMERO, las diferencias pensionales habientes desde la fecha de causación del derecho y hasta que se haga efectivo el reajuste de la mesada.

**TERCERO:** Que se condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, representada legalmente por la señora ADRIANA MARIA GUZMAN o por quien haga sus veces, a reconocer y pagar a la señora ANA JULIA RIOS ROMERO, la indexación de las diferencias pensionales.

**CUARTO:** Se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar las costas procesales, incluyendo las agencias en derecho.

**QUINTO:** Que se condene a la Entidad demandada a pagar a mi poderdante todo derecho prestacional o pensional que llegare a probarse en el decurso del proceso, con base en las facultades extra y ultrapetita, que le asisten al Juzgador de Instancia.

Los antecedentes fácticos de este proceso referidos a la demanda (fls. 2-3), giran en torno a que, el causante ANTONIO CABRERA cotizó para los riesgos IVM un total de 819 semanas, por lo que, le fue reconocida pensión de vejez por Resolución 00664 del 17 de febrero de 1984, a partir del 12 de enero de 1983, en cuantía de $11.674, con un IBL de $21.614,26 y tasa del 54% por 776 semanas, conforme al Decreto 3041 de 1966; y que, al realizar los cálculos en debida forma, se obtiene una mesada superior.

Agrega que, el señor CABRERA falleció el 25 de enero de 2007, por lo que, le fue sustituida la pensión de vejez en su calidad de cónyuge, por Resolución 008752 de ese año y que, el 02 de enero de 2017 presentó revocatoria directa solicitando la reliquidación de su mesada, por cuando el ISS al momento de liquidar la prestación no indexó los salarios base de cotización, petición resuelta en forma adversa a través de la Resolución GNR 26115 del 23 de enero de 2017.

Por su parte, Colpensiones al contestar la demanda se opone a las pretensiones (fls. 43-48), argumentando que, no procede la reliquidación de la pensión sustitutiva, puesto que la misma fue reconocida conforme a la que devengaba el causante al momento de su fallecimiento.

**DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

La decisión de primera instancia fue proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali, por cuya parte resolutiva dispuso:

> **PRIMERO**: **DECLARAR no** probadas las excepciones propuestas por la parte llamada a juicio, la de prescripción se declara probada parcialmente con las mesadas anteriores al 2 de enero de 2014.
>
> **SEGUNDO: DECLARAR** que la **ANA JULIA RIOS ROMERO**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 29.416.917, es derechosa al reajuste de pensión de sobreviviente y en consecuencia se condena a COLPENSIONES al pago de la diferencia en cuantía de $**38.663.924,72** por el periodo comprendido entre el día 2 de enero de 2014 al día 31 de julio de 2021, de igual forma la demandada deberá reajustar la mesada pensional que viene cancelado a la parte actora en la suma de **$357.685,oo** a partir del primero de agosto de 2021, con sus mesadas adicionales y con los reajustes que determine el gobierno nacional.
>
> **TERCERO: SE CONDENA** a la demandada **COLPENSIONES** a la indexación de las sumas objeto de condena, una vez se realice el pago real y efectivo de dichas sumas**.**
>
> **CUARTO: COSTAS** a cargo de la parte demandada y como agencias en derecho se fija la suma de **$2.300.000,oo** a favor de la parte demandante.

Lo anterior, tras considerar el *A quo* que, conforme a la jurisprudencia, resulta procedente la indexación de los salarios base de cotización reportados por el causante en las últimas 150 semanas, conforme al Decreto 3041 de 1966, cálculo que efectuado arroja una mesada para el año 1983 de $16.966, superior a la reconocida por el ISS de $11.674.

**APELACIÓN**

La apoderada judicial de la parte demandada apela la decisión, argumentando que, su representada efectuó la liquidación de la pensión de vejez conforme al Acuerdo 224 de 1966, aprobado por Decreto 3041 del mismo año y que, realizadas las operaciones aritméticas, según acto administrativo de 2017, arroja un valor igual a la mesada que percibe la demandante, por lo que, considera se ha actuado con diligencia, reconociendo y pagando la prestación conforme a los parámetros legales. Así las cosas, solicita se revise la liquidación, pues el causante efectuó cotizaciones adicionales con posterioridad a la fecha de efectividad de su pensión de vejez, es decir, para el 12 de enero de 1983, con un total de 37 semanas adicionales y, para ello,

se debe realizar un trámite diferente que se denomina devolución de aportes que tendría que solicitar la demandante. Culmina solicitando que se absuelva de la condena en costas, pues siempre se ha actuado de buena fe pagándose la pensión a la actora.

**CONSULTA**

Igualmente, por haber resultado desfavorable la sentencia a Colpensiones, se impone a su favor el grado jurisdiccional de consulta, de conformidad con el artículo 69 del C.P. del T. y S.S. y las orientaciones jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto de la interpretación del citado canon legal.

**ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN LA SEGUNDA INSTANCIA**

Mediante providencia del 14 de diciembre de 2021, el Despacho ordenó correr traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión, tal como lo dispone el Decreto 806 del 4 de junio de 2020.

La apoderada judicial de la demanda alegó de conclusión, reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, solicitando se absuelva a su representada de todas las pretensiones formuladas por la demandante y se revoquen las condenas impuestas. La parte actora guardó silencio.

**C O N S I D E R A C I O N E S:**

El problema jurídico se concreta en determinar si, hay lugar a la reliquidación de la pensión de vejez del pensionado fallecido ANTONIO CABRERA, la que a su vez se le sustituyó a la demandante como cónyuge supérstite, acorde con los postulados de la indexación de la primera mesada pensional, en aplicación del Decreto 3041 de 1966, con el consecuente pago de las diferencias pensionales e indexación, en la forma determinada por el A quo.

Para resolver lo anterior, la Sala tendrá en cuenta los siguientes aspectos fácticos que o bien no se discutieron, o bien se encuentran suficientemente acreditados:

***i)*** Que al señor ANTONIO CABRERA *(q.e.p.d.)*, fallecido el 25 de enero de 2007, conforme a **Resolución 00664 del 17 de febrero de 1984** expedida por el entonces ISS (fl. 9), le fue reconocida pensión por vejez desde el **12 de enero de 1983**, con una mesada de **$11.674,** ello conforme al Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el 3041 del mismo año, liquidación que se basó en un Salario Mensual Base de $21.614,26 y tasa del 54% por 776 semanas;

***ii)*** que por Resolución 008752 del 28 de junio de 2007 (fls. 10-11), el ISS le reconoció a la hoy demandante, ANA JULIA RÍOS ROMERO, en su calidad de cónyuge supérstite, pensión de sobrevivientes a partir del **25 de enero de 2007**, fecha de deceso del causante, en cuantía mínima de **$433.700**;

***iii)*** que el 02 de enero de 2017 la demandante presentó revocatoria directa solicitando la reliquidación de la pensión de sobrevivientes (fls. 12-15), resuelta en forma adversa por Colpensiones a través de acto administrativo GNR 26115 del 23 de enero de 2017 (fls. 20-23).

Ahora bien, frente a la norma aplicable en el presente asunto, no hay duda de que lo es el Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, pues el derecho pensional del causante se causó el 12 de enero de 1983, para cuando cumplió los 60 años de edad *(nació el mismo día y mes de 1923, fl. 9*. Así así fue reconocido por la Entidad de Seguridad Social demandada en el acto administrativo que reconoce el derecho pensional.

En cuanto a la indexación de la primera mesada pensional, precisa la Sala que si bien la indexación no es una institución expresamente reglada en la legislación colombiana, particularmente en materia de pensiones, por lo menos hasta la aparición de la ley 100 de 1993, encontró desde sus inicios sustento en principios generales de derecho como el de la equidad, justicia, enriquecimiento sin causa e integralidad del pago, los cuales sin duda son también fuente del derecho, al igual que la ley y la costumbre. Sin embargo, cabe agregar, que desde la constitución de 1991 el constituyente consagró en la parte dogmática de la carta, principios íntimamente relacionados con este sistema de actualización que obligan a dimensionar este fenómeno desde una perspectiva diferente, pues sin duda en este nuevo escenario, el mantenimiento del valor constante de las mesadas pensionales constituyó un

avance definitivo en el reconocimiento y regulación de la indexación como parte esencial para el otorgamiento de derechos de índole prestacional como las pensiones.

Por esta razón, la tendencia jurisprudencial que inicialmente le otorgó reconocimiento institucional con fundamento en los principios inicialmente señalados y posteriormente la proscribió por carecer de regulación expresa, terminó aceptándola para las pensiones reconocidas a partir de la Constitución Política de 1991. Pero esta posición que limitaba el reconocimiento de la indexación al hecho de haberse causado el derecho en vigencia de la actual Constitución sufrió un cambio importante, a partir de la **sentencia de octubre 16 de 2013, radicación 47709**, donde la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia **acogió nuevamente la tesis inicial de la indexación para todas las pensiones anteriores o posteriores a la vigencia de la actual Constitución**, con fundamento en los mismos criterios que sirvieron de fundamento a la posición inicial de 1982; no obstante, recientemente la dicha Sala de Casación Laboral, retomó el criterio de la improcedencia de la indexación de la primera mesada pensional, concedidas por el Instituto de Seguros Sociales bajo el amparo del acuerdo 049 de 1990 y anteriores, pues consideró que conforme con los reglamentos del Instituto, las prestaciones otorgadas por éste se calculaban *"según sus propias fórmulas, con el salario mensual base de cotización y no con los salarios devengados",* así lo expuso en **sentencia SL1186-2018, con radicación número 50748 del 18 de abril de 2018**.

No obstante, esta Sala de decisión verifica que el sistema de categorización de salarios y la aplicación del factor 4.33, propio de la liquidación de las pensiones cobijadas por el **Decreto 3041 de 1966** *-aplicable al caso-* y posteriores (2879 de 1985 y Acuerdo 049 de 1990), no constituye mecanismo de actualización salarial alguno y menos comporta lo pretendido por la demandante cual es la corrección monetaria a través del IPC.

Los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, enseñan desde la sentencia C-862 del 19 de octubre de 2006, que frente a la ausencia de una previsión legal que determinara la forma de actualizar la primera mesada pensional para los pensionados cobijados por el artículo 260 del CST, situación contraria a los principios consagrados en la Carta de 1991, era preciso adoptar

un criterio reparador de tal afectación en igualdad de condiciones para todos los pensionados, siendo la indexación el mecanismo adecuado para la satisfacción de los derechos y principios constitucionales en juego, razones que, entre otras, llevaron a la Corporación a declarar exequible en forma condicionada la expresión *"salarios devengados en el último año de servicios"* contenida en los numerales 1º y 2º del artículo 260 del CST, en el entendido que el salario base para la liquidación de la pensión debía actualizarse con base en la variación del índice de precios del consumidor certificada por el DANE para todos los pensionados sin discriminación.

En el mismo sentido se pronunció en sentencia C-891A del 01 de noviembre de 2006, respecto a la expresión *"y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios"* contenida en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 relativo a las pensiones restringidas en él contempladas, bajo el entendimiento que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional debe ser actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE.

La Corte Constitucional ha aclarado sus decisiones constitucionales, advirtiendo que la indexación de la primera mesada pensional no sólo debe reconocerse para pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la nueva Carta Política de 1991 sino frente a todas las pensiones, legales o extra-legales, anteriores o posteriores a la reforma constitucional sin discriminación de ninguna índole –Sentencia T-220 del 01 de abril de 2014-, en tanto que no hacerlo conduce a la vulneración de derechos fundamentales de los pensionados.

En sentencias **SU-069 de 21 de junio de 2018** (en la cual la Corte Constitucional acometió la tarea de construir las líneas jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, confirmando la aplicabilidad de la indexación para todo tipo de pensiones, análisis coincidente con la línea jurisprudencial publicada y graficada en la página web de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia) y **SU 168 del 16 de marzo de 2017**, se hizo un recuento de las reglas jurisprudenciales sobre el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, señalando que aplica a todos los pensionados, y determinó las siguientes razones *"(…) para sostener que la indexación también se aplica a las pensiones causadas en vigencia de la Constitución de 1886"*:

*(…)*

***(i) La indexación de la primera mesada pensional fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia desde 1982, al garantizar el derecho con fundamento en los postulados de justicia, equidad y los principios laborales.***

***(ii) La indexación se sustenta en máximas constitucionales que irradian situaciones jurídicas consolidadas en vigencia de la Constitución de 1886, pero cuyos efectos se proyectan con posterioridad, máxime cuando se trata de prestaciones periódicas. En efecto, se indicó que con fundamento en el artículo 53 de la Carta de 1991, así como la interpretación sistemática de los principios del in dubio pro operario (art. 48), Estado social de derecho (art. 1º), especial protección a las personas de la tercera edad (art. 46), igualdad (art. 13) y mínimo vital, existe el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional.***

***(iii) La indexación de la primera mesada pensional tiene la característica de ser un derecho universal.***

***(iv) La certeza del derecho a indexar se presenta cuando la autoridad judicial lo reconoce como tal. A partir de ese momento se empieza a contabilizar el término de prescripción de las pensiones causadas en vigencia de la Constitución de 1886. Ello por cuanto para aquella época el derecho era incierto y no resulta proporcional ordenar el pago de algo de lo cual no se tenía seguridad sobre su existencia, además, se pondría en riesgo el principio de sostenibilidad financiera contenido en el artículo 334 de la Constitución Política[1]…"***

Esto, compagina con las conclusiones de la **sentencia de unificación del año 2017**, que depuró las siguientes sub-reglas:

***"(i) es fundamental; (ii) se predica de todo tipo de pensiones, es decir, tiene carácter universal y (iii) por regla general, la acción de tutela es procedente para buscar su protección. Así mismo es preciso señalar que, (iv) la prescripción se predica de las mesadas pensionales indexadas y nunca del derecho; (v) el régimen prescriptivo, por regla general, es el establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y (vi) por vía excepcional, se aplica un régimen prescriptivo diferenciado a la indexación que se reconozca sobre pensiones causadas antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, que es el establecido en las sentencias SU-1073 de 2012, SU-131 de 2013 y SU-415 de 2015. Por último, (vii) la fórmula matemática que unificadamente se usa para hacer el cálculo de la indexación es la establecida por la sentencia T-098 de 2005."***

Analizado los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, así como sus decisiones más recientes, la Sala acoge tales precedentes frente a la procedencia de la indexación de la primera mesada pensional, pues

[1] "*La Sala encuentra que la certeza del derecho es el momento a partir del cual se debe determinar el término de prescripción. Ello se encuentra en concordancia con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo que señala que 'Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años,* ***que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible****, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto. // En este orden de ideas, pese al carácter universal del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1991, hace que* ***sólo a partir de esta decisión de unificación se genere un derecho cierto y exigible".*** Resaltos del texto, sentencia SU-1073 de 2012.

además, como se consideró desde los albores de la aplicación por la jurisprudencia, la indexación no representa en si ninguna condena adicional, sino simplemente la actualización en términos de valor de una obligación o acreencia laboral, cuya satisfacción ocurre en tiempo posterior a la época en que se causaron los salarios o en este caso las cotizaciones y que por esa razón sufrieron los efectos devaluatorios de una economía inflacionaria como la nuestra. En tal sentido, resulta procedente la actualización de la base salarial para efectos del cálculo de la mesada pensional, como lo efectuó el juez de instancia, ajustándose a derecho la decisión en este puntual aspecto.

Así las cosas, la Sala procedió a efectuar el cálculo de la primera mesada pensional, teniendo en cuenta para ello el ingreso base debidamente indexado de las últimas 150 semanas de cotización, así como las categorías de dichos ingresos conforme al Decreto 3041 de 1966, lo que arrojó un Salario Mensual Base de **$32.438,89**, que al aplicarle una tasa de reemplazo del **51%** por 782,28 semanas al 11 de enero de 1983, conforme al artículo 15° de la mentada norma, arroja una mesada pensional a partir del 12 de enero de 1983 de **$16.543,83**, la que resulta ligeramente inferior a la liquidada por el juez de instancia -$16.966-, y superior a la reconocida por el ISS de $11.674 (fl. 9), de donde deviene que hay lugar al reajuste pensional deprecado.

Para efectos del cálculo de la mesada pensional se consideran las cotizaciones efectuadas por el causante hasta el día **11 de enero de 1983** *-y no hasta el 27 de septiembre de 1983 como lo efectuó el A quo-*, pues recordemos que el derecho pensional se causa y reconoce desde el 12 de enero de ese año, por lo que, no se pueden considerar cotizaciones posteriores *-como lo refiere la demandada en la alzada-*, fecha para la cual contaba con 782,28 semanas cotizadas, que dan lugar a una tasa de reemplazo del **51%** *-y no la considerada por en la sentencia de 52%-*, ello conforme a lo previsto por el artículo 15, Decreto 3041 de 1966, que prevé:

> *"…La pensión mensual de invalidez, o la de **vejez** se integrarán así:*
> *a. Con una cuantía básica igual al **cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual de base**, y*
> *b. Con **aumentos equivalentes al uno y dos décimos por ciento (1.2%) del mismo salario mensual de base por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización**.*
> *El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33 la ciento cincuentava parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó en las últimas ciento cincuenta semanas de cotización…"*

En lo que respecta a la excepción de prescripción propuesta por Colpensiones al contestar la demanda (fls. 46), se tiene que el derecho por vejez se otorgó al causante desde el 12 de enero de 1983 por resolución notificada el 27 de marzo de 1984 (fl. 9); prestación sustituida a la hoy demandante a partir del 25 de enero de 2007 por acto administrativo notificado el **21 de agosto de 2007** (fls. 10-11); la reclamación por el reajuste pensional data del **02 de enero de 2017** (fls. 12-15)**,** decidida por acto administrativo notificado el **22 de noviembre de 2017** (fls. 19-23), y la demanda se presentó el **30 de noviembre de 2017** (fl. 7), por lo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 151 del C.P.T y de la S.S. y 488 del del CST, aplicables al caso en concreto, **prescriben las diferencias causadas con anterioridad al 02 de enero de 2014**, tal y como lo dispuso el A quo, imponiéndose la confirmación de la decisión en este aspecto.

En consecuencia, partiendo de la mesada pensional establecida en esta instancia, las diferencias pensionales causadas entre el **02 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2021** -extremos de la sentencia-, por 14 mesadas *(el derecho se causa antes de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005)*, ascienden a la suma de **$12.276.088,42** *-conforme a cuadro adjunto que se anexa al acta-*, inferior a la liquidada por el A quo -$38.663.924,72-, diferencias que, actualizadas al **31 de diciembre de 2021**, arrojan un total de **$12.730.259,29**, imponiéndose la **modificación** de la decisión.

La mesada pensional para el **año 2021** asciende a la suma de **$984.223,15**, lo que genera una diferencia de **$75.697,15**, frente a la reconocida por Colpensiones de $908.526, y no la establecida por el A quo de $357.685, imponiéndose igualmente la modificación de la sentencia en este aspecto.

Adicionalmente, conforme a los principios de *"solidaridad"* y "*sostenibilidad financiera del Sistema Pensional*" plasmados en la Ley 100 de 1993 y el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, y el artículo 69 del Decreto 2353 de 2015, considera la Sala que, sobre el retroactivo por diferencias pensionales reconocido y que se siga causando, se debe autorizar a COLPENSIONES para que, efectúe los descuentos por concepto de aportes al régimen de salud que correspondan y, en ese sentido, se **adicionará** la decisión.

Frente a la indexación de las diferencias pensionales causadas y las que se sigan causando, es pertinente puntualizar que ella es procedente en aquellos casos para compensar el evidente impacto que la pérdida del valor adquisitivo produce en las obligaciones laborales de cumplimiento tardío, tal y como ha sido aceptado por la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, siempre que por otra parte no exista un mecanismo de actualización diferente. Así las cosas, en el presente asunto hay lugar a confirmar la decisión en tal sentido, debiéndose efectuar la actualización con la siguiente formula:

$$VA = \frac{VH \text{ (total diferencias pensionales debidas)} \times IPC \text{ FINAL (IPC mes en que se realice el pago)}}{IPC \text{ INICIAL (IPC mes en que se causa la diferencia)}}$$

Finalmente, frente el argumento de alzada de la parte demandada respecto de las costas procesales, establece el numeral 1º del artículo 365 del CGP, Ley 1564 de 2012, aplicable por analogía en el procedimiento laboral a la voz del artículo 145 del CPTSS, que se condenará por ellas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva de manera desfavorable el recurso de apelación. En este caso, siendo COLPENSIONES la parte vencida en juicio, se ajusta a derecho la decisión de instancia de imponerle costas a su cargo, por lo que no prospera la apelación.

En mérito de lo expuesto la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**R E S U E L V E:**

**PRIMERO: MODIFICAR** el resolutivo **SEGUNDO** de la sentencia **APELADA y CONSULTADA**, en el sentido de ESTABLECER que, lo adeudado por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** a la señora **ANA JULIA RÍOS ROMERO,** por concepto de retroactivo por diferencias pensionales causadas entre el **02 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2021**, por 14 mesadas, asciende a la suma de **$12.730.259,29**.

La mesada pensional para el **año 2021** asciende a la suma de **$984.223,15**, lo que genera una diferencia de **$75.697,15**, frente a la reconocida por Colpensiones.

**SEGUNDO: ADICIONAR** la sentencia **APELADA y CONSULTADA**, en el sentido de AUTORIZAR a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, para que, del retroactivo que por diferencias pensionales corresponda a la demandante, efectúe los descuentos por concepto de aportes al régimen de salud que correspondan

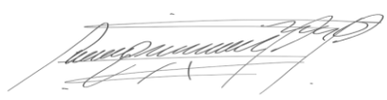
**TERCERO: SE CONFIRMA** en lo demás la sentencia **APELADA y CONSULTADA**.

**CUARTO**: **COSTAS** en esta instancia a cargo de Colpensiones, apelante infructuoso y, en favor de la demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de $1.000.000. **SIN COSTAS** por el grado jurisdiccional de consulta.

**QUINTO**: A partir del día siguiente a la inserción de la presente decisión en la página *web* de la Rama Judicial en el *link* de sentencias del Despacho, comienza a correr el término para la interposición del recurso extraordinario de casación, para ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, si a ello hubiere lugar. En caso de no interponerse casación por las partes en la oportunidad legal, por Secretaría, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

Quedan resueltos todos los puntos objeto de estudio y así se suscribe por quienes integran la Sala de Decisión.

(firma electrónica)
**MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO**
**Magistrada**



**LUIS GABRIEL MORENO LOVERA**
**Magistrado**

**CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ**
**Magistrado**

## ANEXOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIQUIDACION DE PENSIÓN CONFORME DEC. 3041/66 | | | | | | | | |
| Ordinario: | 76001-3105-**011 2018 00245 01** | | | Nacimiento: | | **12/01/1923** | | |
| Causante: | **ANTONIO CABRERA** | | | 60 años a: | | 1.983 | | |
| Demdante: | **ANA JULIA RÍOS ROMERO** | | | Última cotización: | | 27/09/1983 | | |
| | | | | 1050 días (150 semanas) a: | | 11/01/1983 | | |
| | | | | Indexación a: | | **12/01/1983** | | |
| | | | | | | | | |
| **RECONSTRUCCIÓN HISTORIA LABORAL** | | | | | | | | |
| **No.** | **PERIODOS (DD/MM/AA)** | | | | **PROMEDIO** | **DIAS DEL** | | |
| **RANGO** | **DESDE** | **HASTA** | **SEMANAS** | **CATEGORIA** | **CATEGORÍA** | **PERIODO** | | |
| 1 | 31/01/1980 | 31/12/1980 | 48,00 | 14 | 14.610 | 336 | | |
| 2 | 1/01/1981 | 28/02/1981 | 8,43 | 14 | 14.610 | 59 | | |
| 3 | 1/03/1981 | 8/07/1981 | 18,57 | 15 | 17.790 | 130 | | |
| 4 | 27/07/1981 | 31/12/1981 | 22,57 | 17 | 25.530 | 158 | | |
| 5 | 1/01/1982 | 30/04/1982 | 17,14 | 17 | 25.530 | 120 | | |
| 6 | 1/05/1982 | 19/11/1982 | 29,00 | 18 | 30.150 | 203 | | |
| 7 | 29/11/1982 | 31/12/1982 | 4,71 | 17 | 25.530 | 33 | | |
| 8 | 1/01/1983 | 11/01/1983 | 1,57 | 17 | 25.530 | 11 | | |
| | | | | | | | | |
| | TOTALES | | 150,00 | | | 1.050 | | |
| NOTAS: | 1) Se toman semanas enteras cotizadas en cada categoría como lo indica el reglamento del Dcto. 3041/66 | | | | | | | |

| **CÁLCULO PENSIONAL** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERIODOS (DD/MM/AA)** | | **No.** | **DIAS DEL** | **PROMEDIO** | INDICE | INDICE | PROMEDIO | BASE |
| **DESDE** | **HASTA** | **RANGO** | **PERIODO** | **CATEGORÍA** | INICIAL | FINAL | INDEXADO | SALARIAL |
| 31/01/1980 | 31/12/1980 | 1 | 336,00 | 14.610 | 1,963100 | 3,875100 | 28.838,71 | 322.993,56 |
| 1/01/1981 | 28/02/1981 | 2 | 59,00 | 14.610 | 2,470600 | 3,875100 | 22.914,79 | 45.065,75 |
| 1/03/1981 | 8/07/1981 | 3 | 130,00 | 17.790 | 2,470600 | 3,875100 | 27.902,57 | 120.911,14 |
| 27/07/1981 | 31/12/1981 | 4 | 158,00 | 25.530 | 2,470600 | 3,875100 | 40.042,65 | 210.891,28 |
| 1/01/1982 | 30/04/1982 | 5 | 120,00 | 25.530 | 3,124300 | 3,875100 | 31.664,49 | 126.657,96 |
| 1/05/1982 | 19/11/1982 | 6 | 203,00 | 30.150 | 3,124300 | 3,875100 | 37.394,72 | 253.037,61 |
| 29/11/1982 | 31/12/1982 | 7 | 33,00 | 25.530 | 3,124300 | 3,875100 | 31.664,49 | 34.830,94 |
| 1/01/1983 | 11/01/1983 | 8 | 11,00 | 25.530 | 3,875100 | 3,875100 | 25.529,50 | 9.360,82 |
| | | | | | | | | |
| TOTALES | | | 1.050 | | | | | 1.123.749,06 |
| SALARIO MENSUAL BASE (Total de la base salarial / semanas del periodo (150) * 4,33) | | | | | | | | 32.438,89 |
| TASA DE REEMPLAZO (**782,28 SEMANAS** AL 11/01/1983) | | | **51%** | | **MESADA TRIBUNAL 1983** | | | ***16.543,83*** |
| | | | | | **MESADA JUZGADO 1983** | | | ***16.966,00*** |
| | | | | | **MESADA ISS 1983** | | | ***11.674,00*** |

## RETROACTIVO DIFERENCIAS PENSIONALES

| DESDE | HASTA | VARIACION | #MES | MESADA CALCULADA | MESADA ISS | DIFERENCIA | RETROACTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/1983 | 31/12/1983 | 0,1249 | 12,00 | $ 16.543,83 | $ 11.674,00 | $ 4.869,83 | PRESCRITO |
| 1/01/1984 | 31/12/1984 | 0,1100 | 12,00 | $ 19.535,66 | $ 14.057,58 | $ 5.478,08 | |
| 1/01/1985 | 31/12/1985 | 0,1000 | 12,00 | $ 22.703,08 | $ 16.622,42 | $ 6.080,66 | |
| 1/01/1986 | 31/12/1986 | 0,1200 | 12,00 | $ 26.103,19 | $ 19.414,46 | $ 6.688,73 | |
| 1/01/1987 | 31/12/1987 | 0,1100 | 12,00 | $ 30.862,47 | $ 20.510,00 | $ 10.352,47 | |
| 1/01/1988 | 31/12/1988 | 0,2700 | 12,00 | $ 36.106,54 | $ 25.637,00 | $ 10.469,54 | |
| 1/01/1989 | 31/12/1989 | 0,2600 | 12,00 | $ 45.855,31 | $ 32.560,00 | $ 13.295,31 | |

| DESDE | HASTA | VARIACION | #MES | MESADA CALCULADA | MESADA ISS | DIFERENCIA | RETROACTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01/1990 | 31/12/1990 | 0,2606 | 13,00 | $ 57.777,69 | $ 41.025,00 | $ 16.752,69 | |
| 1/01/1991 | 31/12/1991 | 0,2600 | 13,00 | $ 72.834,56 | $ 51.716,00 | $ 21.118,56 | |
| 1/01/1992 | 31/12/1992 | 0,2503 | 13,00 | $ 91.771,54 | $ 65.190,00 | $ 26.581,54 | |
| 1/01/1993 | 31/12/1993 | 0,2109 | 13,00 | $ 114.741,96 | $ 81.510,00 | $ 33.231,96 | |
| 1/01/1994 | 31/12/1994 | 0,2259 | 14,00 | $ 138.941,04 | $ 98.700,00 | $ 40.241,04 | |
| 1/01/1995 | 31/12/1995 | 0,1946 | 14,00 | $ 170.327,82 | $ 118.934,00 | $ 51.393,82 | |
| 1/01/1996 | 31/12/1996 | 0,2163 | 14,00 | $ 203.473,61 | $ 142.125,00 | $ 61.348,61 | |
| 1/01/1997 | 31/12/1997 | 0,1768 | 14,00 | $ 247.484,95 | $ 172.005,00 | $ 75.479,95 | |
| 1/01/1998 | 31/12/1998 | 0,1670 | 14,00 | $ 291.240,29 | $ 203.826,00 | $ 87.414,29 | |
| 1/01/1999 | 31/12/1999 | 0,0923 | 14,00 | $ 339.877,42 | $ 236.460,00 | $ 103.417,42 | |
| 1/01/2000 | 31/12/2000 | 0,0875 | 14,00 | $ 371.248,11 | $ 260.100,00 | $ 111.148,11 | |
| 1/01/2001 | 31/12/2001 | 0,0765 | 14,00 | $ 403.732,32 | $ 286.000,00 | $ 117.732,32 | |
| 1/01/2002 | 31/12/2002 | 0,0699 | 14,00 | $ 434.617,84 | $ 309.000,00 | $ 125.617,84 | |
| 1/01/2003 | 31/12/2003 | 0,0649 | 14,00 | $ 464.997,63 | $ 332.000,00 | $ 132.997,63 | |
| 1/01/2004 | 31/12/2004 | 0,0550 | 14,00 | $ 495.175,98 | $ 358.000,00 | $ 137.175,98 | |
| 1/01/2005 | 31/12/2005 | 0,0485 | 14,00 | $ 522.410,65 | $ 381.500,00 | $ 140.910,65 | |
| 1/01/2006 | 31/12/2006 | 0,0448 | 14,00 | $ 547.747,57 | $ 408.000,00 | $ 139.747,57 | |
| 25/01/2007 | 31/12/2007 | 0,0569 | 13,20 | $ 572.286,66 | **$ 433.700,00** | $ 138.586,66 | |
| 1/01/2008 | 31/12/2008 | 0,0767 | 14,00 | $ 604.849,77 | $ 461.500,00 | $ 143.349,77 | |
| 1/01/2009 | 31/12/2009 | 0,0200 | 14,00 | $ 651.241,75 | $ 496.900,00 | $ 154.341,75 | |
| 1/01/2010 | 31/12/2010 | 0,0317 | 14,00 | $ 664.266,59 | $ 515.000,00 | $ 149.266,59 | |
| 1/01/2011 | 31/12/2011 | 0,0373 | 14,00 | $ 685.323,84 | $ 535.600,00 | $ 149.723,84 | |
| 1/01/2012 | 31/12/2012 | 0,0244 | 14,00 | $ 710.886,42 | $ 566.700,00 | $ 144.186,42 | |
| 1/01/2013 | 31/12/2013 | 0,0194 | 14,00 | $ 728.232,04 | $ 589.500,00 | $ 138.732,04 | |
| **2/01/2014** | 31/12/2014 | 0,0366 | 13,97 | $ 742.359,75 | $ 616.000,00 | $ 126.359,75 | $ 1.764.824,44 |
| 1/01/2015 | 31/12/2015 | 0,0677 | 14,00 | $ 769.530,11 | $ 644.350,00 | $ 125.180,11 | $ 1.752.521,57 |
| 1/01/2016 | 31/12/2016 | 0,0575 | 14,00 | $ 821.627,30 | $ 689.455,00 | $ 132.172,30 | $ 1.850.412,21 |
| 1/01/2017 | 31/12/2017 | 0,0409 | 14,00 | $ 868.870,87 | $ 737.717,00 | $ 131.153,87 | $ 1.836.154,19 |
| 1/01/2018 | 31/12/2018 | 0,0318 | 14,00 | $ 904.407,69 | $ 781.242,00 | $ 123.165,69 | $ 1.724.319,65 |
| 1/01/2019 | 31/12/2019 | 0,0380 | 14,00 | $ 933.167,85 | $ 828.116,00 | $ 105.051,85 | $ 1.470.725,95 |
| 1/01/2020 | 31/12/2020 | 0,0161 | 14,00 | $ 968.628,23 | $ 877.803,00 | $ 90.825,23 | $ 1.271.553,25 |
| 1/01/2021 | 31/07/2021 | | 8,00 | $ 984.223,15 | $ 908.526,00 | $ 75.697,15 | $ 605.577,17 |
| **RETROACIVO AL 31 DE JULIO DE 2021** | | | | | | | **$ 12.276.088,42** |
| 1/08/2021 | 31/12/2021 | | 6,00 | $ 984.223,15 | $ 908.528,00 | $ 75.695,15 | $ 454.170,88 |
| **TOTAL RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA ENTRE EL 02/01/2014 Y EL 31/12/2021** | | | | | | | **$ 12.730.259,29** |

Firmado Por:

Monica Teresa Hidalgo Oviedo
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 008 Laboral
Tribunal Superior De Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2c3dbb62971c55ae5e9c3326747e6d42dc1eb9889e4b816df59fdb0156149c8a**
Documento generado en 03/03/2022 10:24:36 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**
**https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica**